

Emergencia sanitaria

Amplio consenso para que la comisión de reconstrucción se ponga en marcha

La mayoría de los partidos pacta 41 comparecencias y empezar a trabajar ya

CARMEN DEL RIEGO
 Madrid

Las comisiones especiales que habitualmente se crean en el Congreso, y más si son de investigación, suelen mostrar desde el principio, desde el mismo día en que se constituyen, cómo acabarán y cuáles serán las conclusiones, que normalmente los partidos llevan ya prácticamente preconcebidas. Pero no parece que eso vaya a ser así con la comisión de reconstrucción económica y social que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accedió a constituir, a petición de Pablo Casado, para dar forma a su idea de unos nuevos pactos de la Moncloa con los que afrontar la crisis poscoronavirus que se avecina, en especial la económica.

A pesar del enfrentamiento político que las sesiones de control al Gobierno, en el Congreso, dejan todas las semanas, con discursos irreconciliables, las dos sesiones que ha celebrado la comisión de reconstrucción parecen un remanso de paz, donde un consenso amplio y transversal ha presidido la preparación de los trabajos.

La comisión debía decidir ayer el nombre y el número de los comparecencias en la comisión, y se partía de posiciones muy separadas. Los grupos parlamentarios habían presentado 308 solicitudes de comparecencia, con criterios muy distintos. Mientras el PP y otros partidos querían que no hubiera comparecencias de ministros, el PSOE y Unidas Podemos las consideraban importantes para que explicaran sus planes. Al final, y tras un largo receso que concedió el presidente de la comisión, el socialista Patxi López, para que los portavoces pudieran llegar a acuerdos, hubo un amplio consenso por el que PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos



Patxi López junto a los diputados de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona, el miércoles

presentaron una lista única y conjunta de 41 comparecencias, que son los que acudirán a las sesiones de la comisión, con el compromiso de poder pedir más comparecencias en el futuro.

La lista, avalada por 321 diputados de los 350 que componen la Cámara, sólo obtuvo un voto en contra y 16 abstenciones. En esa lista hay miembros del Gobierno: los vicepresidentes Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera y los ministros de Sanidad, Trabajo, Igualdad y Exteriores.

Los demás, expertos y representantes de asociaciones y de la sociedad civil, como la cooperativa Mondragón, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC.OO. En el lado de los expertos, desde Rafael Matesanz,

Acudirán al Congreso siete ministros, expertos y representantes de asociaciones y de la sociedad civil

creador de la Organización Nacional de Transplantes, hasta Emilio Bouza, que fue jefe del servicio de microbiología clínica y enfermedades infecciosas del hospital General Universitario Gregorio Marañón y catedrático de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, o Manel Balcells, presidente del Consell Assessor de Salut.

También hubo acuerdo para que la comisión eche a andar ya la semana que viene, adecuando las sesiones al trabajo parlamentario restante, pero sin descartar incluso reunirse algún sábado, con tal de que todas las comparecencias puedan celebrarse antes de finales de junio. El objetivo es que la comisión pueda seguir trabajando, en cuatro grupos según los temas por tratar: sanidad y salud pública; reactivación económica; políticas sociales y sistema de cuidados, y Unión Europea. La comisión pretende tener terminados sus trabajos a finales de julio, con el objeto de que los acuerdos puedan aplicarse en septiembre.●

Documentos, menos las cuentas de la Casa Real

■ El PSOE sólo ha puesto un límite a la documentación que han solicitado los grupos de la comisión de reconstrucción, "que se pueda entregar conforme a la normativa vigente". Pero ya antes de esta declaración de intenciones de la portavoz socialista, Adriana Lastra, la mesa de la comisión de reconstrucción había desechado una petición de documentación, la que había hecho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que había solicitado, como

en otras ocasiones, las cuentas de la Casa Real de los últimos diez años. Pero no el dinero que tiene asignado la Casa Real, sino los gastos que cada uno de los ministerios han tenido para atender a cuestiones relacionadas con la Casa Real y la familia real, desde los servicios de escolta que dependen del Ministerio del Interior hasta los gastos derivados de los aviones oficiales, que dependen de Defensa. Los letrados, como otras veces, rechazaron la

petición, porque el Congreso no tiene capacidad de fiscalizar las cuentas de la Casa Real. "Empezamos mal", dijo Rufián en la comisión, porque si lo que se pretende es reconstruir el país, resulta "bastante incompatible" hacerlo "sobre pilares carcomidos". ERC apeló a la generosidad de PSOE y PP para permitir que no se vete este tipo de documentación y que la comisión no termine convirtiéndose en un "ellos se lo guisan, ellos se lo comen".

MARISCAL / EFE